

Chillán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.

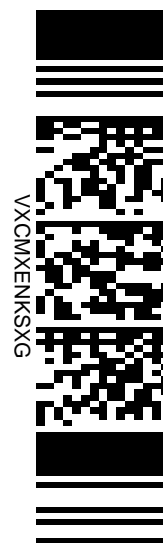
Resolviendo lo pendiente primer otrosí de folio 2:

No considerándose necesario para la decisión del recurso, no ha lugar a lo solicitado.

Vistos:

1°.- Que, comparece el abogado Xavier Montes Oyarzún, en representación de la Municipalidad de Cobquecura, representada por su Alcalde Julio Fuentes Alarcón, y en favor de María Margarita Rivas Muñoz, Sandra Loreto Placencia Aguilera, Carmen Gloria Rivas Pilcante, Gabriela del Carmen Rivas Muñoz, Cecilia De Las Mercedes Pilcante Jiménez, Yanira Damari Águila Orellana, María Cecilia Fuentes Briceño, Rafael Ernesto Salgado Silva, Isaías Antonio Rivas Salgado, Jeanette del Carmen Rivas Chamorro, Roberto Felipe Sanhueza Salgado, Claudio Alejandro Leal Leal y Mirta del Carmen Placencia Cofre, quienes interponen recurso de protección en contra de la contra de la Compañía General De Electricidad S.A., en adelante CGE, representada por Iván Quezada Escobar, o quien lo reemplace o subrogue para todos los efectos legales, por cuanto de forma ilegal y arbitraria no ha dado cumplimiento con sus obligaciones reglamentarias y legales, generando como consecuencia de su negligencia y omisión en su actuar respecto de los constantes y permanentes cortes de suministro eléctrico en la mayor parte de la comuna de Cobquecura. El corte afectó las viviendas de quienes en cuyo favor se interpone el presente recurso, además de afectar continua y prolongadamente la salud tanto de los vecinos específicamente señalados y en general, en las viviendas de los habitantes de la comuna, en bienes nacionales de uso público, en bienes municipales, generando como consecuencia de su negligencia y omisión en su actuar una perturbación, privación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías reconocidas en los números 1, 2, 8 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

Sostienen que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad sobre las cosas corporales e incorporeales, a fin que se adopten de inmediato todas las providencias y diligencias que prudentemente juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al ejercicio de los derechos conculcados de los afectados. Además, por otra parte, en virtud de la facultad que les confiere los artículos 3°, 4° letra b), i) y 28 de la Ley N° 18.695, Orgánica



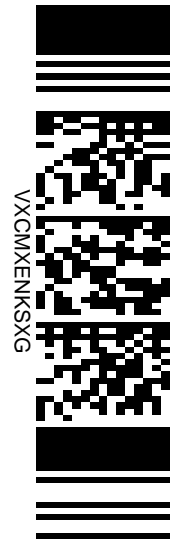
Constitucional de Municipalidades, la cual permite que la Municipalidad pueda desplegar acciones de protección de salud pública y protección del medio ambiente y la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes, para ello, entre otras facultades, puede asumir la defensa jurídica de la comunidad cuando sea procedente.

En cuanto a los hechos, indican, en síntesis, que a contar del día jueves 2 de febrero de 2023 hasta la fecha, la comuna de Cobquecura y sus habitantes han sufrido constantes cortes en el suministro de electricidad en sus viviendas, así como también en bienes municipales y bienes nacionales de uso público. Situación viene repitiéndose desde hace por lo menos tres años. Por cierto, dice, la emergencia relacionada con los incendios, no puede en caso alguno ser motivo de justificación ni compensar los perjuicios que implican los cortes de suministro.

Añade que, el 13 de febrero último, concurrieron 12 de los vecinos individualizados en lo principal de esta presentación a las Oficinas de la CGE en Quirihue, a fin de poder obtener la reparación, reposición o compensación de diversos electrodomésticos. Pero, aunque la empresa compense los daños materiales causados, ello no obsta a que los cortes de suministro o variaciones en el voltaje puedan, nuevamente, inutilizar electrodomésticos y equipo de trabajo, esenciales para la subsistencia de sus dueños.

Explica que su representada, con fecha 3 de febrero del presente presentó una reclamación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a fin de precaver interrupciones eventuales de suministro, requerimiento que hasta la fecha de presentación de la presente acción, no ha tenido respuesta, y que se refirió básicamente al corte de suministro ocurrido el día 2 de febrero durante la tarde, la reposición del servicio, y nuevamente el corte de suministro por no haber contado la Compañía, con el combustible suficiente para hacer funcionar –por más tiempo que el breve lapso en que se reanudó el servicio– el generador dispuesto para tales emergencias, lo que a su vez, denota una grave falta de previsión en el cumplimiento de los deberes que como empresa le corresponden a CGE.

Refiere que debido a los múltiples reclamos recibidos han tratado de gestionar soluciones, informando y reclamando a través de las vías contempladas al efecto en las disposiciones que regulan específicamente la materia, sin embargo, no se ha tenido respuesta, y las situaciones de corte de suministro o variación desproporcionada en el voltaje se han vuelto en un corto lapso de tiempo preocupantemente recurrentes. Mediante sus propios medios y dentro de los límites de nuestras facultades, hemos intentado encontrar algún tipo de solución



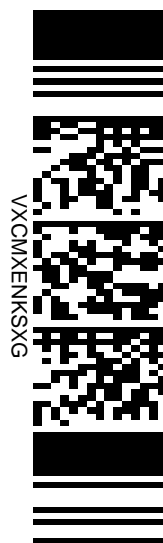
alternativa, sin embargo, el tema excede sus facultades y capacidades, entendiendo sobre todo, que el servicio de distribución de energía eléctrica es de aquellos concesionados y, por lo mismo, es la empresa a quien se le ha entregado la concesión quien debe ser capaz no solo de solucionar los problemas, sino además de dar un servicio de calidad, lo que abarca tanto la mantención, reparación, reposición o cambio de los elementos de dicho servicio, en caso de ser necesario, o, como en el caso de marras, imprescindible.

Señala la normativa que considera aplicable y plantea que, en este caso, el actuar de la parte recurrida constituye una omisión ilegal y arbitraria, el cual atenta contra las garantías consagradas en los numerales 1º, 2º, 9º, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, fundándolo en las razones que expone en el libelo.

Finalmente, que se ordene el restablecimiento del imperio del derecho, y que se adopten en forma urgente todas las medidas necesarias para restablecer el normal servicio de distribución de energía eléctrica, para lo cual solicitan:

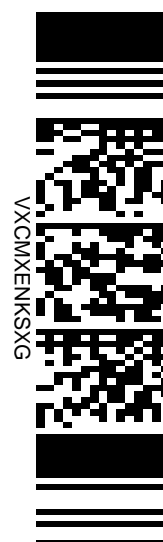
- 1) Que se ordene a la recurrida, CGE, realice un estudio del impacto provocado por los cortes de luz en la comuna de Cobquecura, de forma inmediata.
- 2) Que, se ordene a la recurrida, CGE, que organice cursos y capacitaciones a los vecinos sobre el uso y cuidado del tendido eléctrico, informando sobre los procedimientos que se deben adoptar en caso que se produzca un corte de energía eléctrica.
- 3) Que, se ordene a la recurrida, CGE, realizar reposición y mantención integral de todos sus sistemas y estaciones de distribución de energía eléctrica en la comuna de Cobquecura a fin de evitar, en el corto plazo, nuevos y masivos cortes en el suministro eléctrico.
- 4) Que, se adopten todas las prevenciones que Usía Ilustrísima prudentemente considere pertinente para evitar en el futuro la ocurrencia de tan graves hechos como los descritos, teniendo en consideración los hechos expuestos.
- 5) Que, se condene en costas a la recurrida, en caso de oposición.

2º.- Que, al informar el recurso el abogado Cristian Celis Schneider, en representación de Compañía General de Electricidad S.A., solicita su rechazo con expresa condena en costas.



Indica que el recurso de protección, dada su especial naturaleza, no procede en contra de supuestas vulneraciones a tratados internacionales, así como tampoco en contra de la garantía del numeral 9 del art. 19 de la Constitución Política de la República. Existiendo un derecho o garantía en duda o una trasgresión normativa discutida, esta materia no puede ser resuelta a través de la acción de protección, debiendo ser conocida y fallada a la luz de un juicio de lato conocimiento. Sostiene que su parte no incurre en vulneración a la legalidad ni en arbitrariedad alguna sino, muy por el contrario, ha actuado siempre dentro de los márgenes de operación establecidos por el legislador para las empresas de servicio público concesionado. En cuanto a lo manifestado en el recurso, dice que las normas de calidad y continuidad de suministro no se rige por meras apreciaciones de las personas que se sientan afectados por cortes o fallas en general, sino que existe un régimen normado que permite, a través de parámetros objetivos, establecer si tales vulneraciones existen o no.

Agrega que ni la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), ni el Reglamento de la misma Ley (RLGSE), ni tampoco la Norma Técnica de Calidad de Servicio (NTCS) sostienen que el servicio eléctrico no pueda fallar. Todo lo contrario, puede fallar y ello no es constitutivo de infracción alguna que deba necesariamente ser subsanada como erradamente cree la Municipalidad de Cobquecura. La propia normativa eléctrica reconoce que resulta imposible exigir suministro bajo estándares de continuidad “24 horas/365 días al año” y, muy por el contrario, establece el ya citado margen de indisponibilidad, que constituye en términos más sencillos, una banda de tolerancia legal, que contempla horas sin suministro y la cantidad de interrupciones en un año. Asimismo, los art. 248 y 249 del ya citado RLGSE expresamente consagran la posibilidad de que el concesionario eléctrico pueda suspender el suministro para efectuar trabajos en la red, tales como mantención, reparación, extensión de la misma, etc. pudiendo interrumpirse la prestación del servicio hasta por 8 horas continuas. No basta, mencionar un listado de fallas como lo ha hecho en su acción, sino que hay que establecer, primero, si esas fallas son o no imputables a la concesionaria; si esas fallas superan el máximo permitido por la ley para cada cliente, ya sea en cuanto al número y/o en cuanto a su duración, lo que implica hacer un análisis caso a caso de cada una de las fallas y; hacer dicho análisis para cada cliente en particular y no para una comuna, como erróneamente lo ha hecho la actora. Quien determina si se han superado o no los márgenes de indisponibilidad es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a través de un sistema establecido y reglado, con el objeto de determinar la procedencia de compensaciones, denominado “Proceso de Interrupciones”, proceso que se hace



por cada año completo y que para las fallas del año 2023, se determina durante el año 2024, luego de presentados los antecedentes respectivos por parte de la concesionaria o, en su defecto, un juez, conociendo de los hechos en un proceso de lato conocimiento. Pero, a mayor abundamiento, la determinación por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles acerca de la existencia de una supuesta infracción a la normativa eléctrica, se logra luego de un proceso administrativo de cargos, descargos y, eventualmente, recursos administrativos y recursos judiciales, lo que para el año 2023 ni siquiera ha comenzado, pues como se indicó, dicho proceso comenzará en el año 2024.

Sostiene que la materia del presente recurso, ha sido sometida al imperio del derecho a través de los reclamos presentados ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Por lo tanto, estos hechos ya se encuentran sometidos al imperio del derecho, dejando de ser este recurso de protección la vía idónea al efecto, razón por la cual debe ser rechazado.

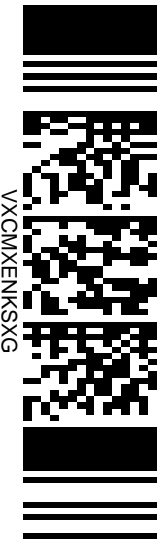
Afirma que las pretensiones contenidas en el recurso de protección escapan al carácter cautelar de este tipo de acción, incluso, escapan de la legalidad. En efecto, su representada como empresa de servicio público concesionado no está obligada legal ni reglamentariamente a organizar cursos ni capacitaciones a particulares acerca de ninguna materia, por lo que pretender que se le obligue a ello a través de una sentencia judicial, ciertamente carece de toda lógica fáctica y jurídica. En cuanto a la petición de reposición y mantención integral de instalaciones, ello corresponde a una obligación legal que pesa sobre cualquier empresa de servicio público eléctrico en aquellos casos en que se encuentre acreditado que las deficientes mantenciones de instalaciones hacen procedente tales medidas. Pero en este caso, nada permite concluir que existe una deficiente prestación del servicio eléctrico y, por lo tanto, nada permite concluir que sea necesaria una “mantención integral” como ha sido solicitado y, en el evento de ser ello necesario, ciertamente no podría ser determinado a través de una acción cautelar como la de autos, sino a través de un juicio de lato conocimiento, lo que, nuevamente, debiera llevar al rechazo del presente recurso de protección.

En cuanto a las interrupciones de suministro en la comuna de Cobquecura, reitera que éstas se miden a través de parámetros objetivos que permiten a las empresas, a los clientes y a la autoridad fiscalizadora, establecer con certeza si se han superado o no los márgenes de indisponibilidad de suministro, para efectos de determinar la procedencia de compensaciones, así como la apertura de eventuales procesos administrativos sancionatorios. De esta forma, la ilegalidad respecto de las interrupciones no queda supeditada a una mera apreciación de



uno o más clientes, sino a los estándares definidos por el legislador. Estos parámetros o estándares, que antes estaban definidos en el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, actualmente y desde el año 2018, están establecidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, de la Comisión Nacional de Energía, en particular, en el Título 4.1 “Interrupciones de Suministro”. En su virtud, las interrupciones de suministro se miden a través de 2 parámetros, denominados SIADI (por sus siglas en inglés *System Average Interruption Duration Index*) y SAIFI (por sus siglas en inglés *System Average Interruption Frequency Index*). En el caso de la comuna de Cobquecura, dada la cantidad de clientes y su distribución, queda dentro del parámetro de Densidad de la red “muy baja”, aplicándose a ese parámetro los indicadores SAIDI y SAIFI. Y al analizar las fallas del período materia del presente recurso de protección, esto es febrero 2023, tenemos que se han registrado en la comuna de Cobquecura, 12 interrupciones, existen 8 interrupciones de suministro que se deben a causas internas. 3 interrupciones corresponden a fuerza mayor, una de las cuales se debe a daños en instalaciones por incendio y dos de ellas a interrupciones solicitadas por Bomberos para combatir incendios en condiciones seguras. Finalmente, 1 interrupción corresponde a causa externa, derivado de una falla a nivel de empresa de transmisión. La duración, causas y clientes afectados, conforme a los parámetros SAIDI y SAIFI, los límites máximos permitidos de SAIFI y SAIDI, 8 y 14 respectivamente, CGE en todo el 2023, es decir, no solo considerando el mes de febrero de este año, tiene un registro para esos mismos índices de 0,1 y 0,3, que corresponde porcentualmente en ambos casos a 2%. En otras palabras, CGE para la anualidad respectiva puede llegar hasta el 100% y hasta ese punto aún está dentro de los márgenes permitidos. Conforme a las interrupciones registradas en todo el año 2023, CGE recién lleva un 2% para ambos indicadores, con lo que se concluye que estamos ampliamente dentro de los márgenes permitidos por la Norma Técnica.

A propósito de los artefactos dañados, refiere que cuando hay una falla en el sistema eléctrico, sea esta interna, externa o derivado de fuerza mayor, sea ésta de origen en las redes de distribución, transmisión o generación, es posible que se generen alteraciones en las variables eléctricas. Estas variaciones debieran ser despejadas por los sistemas de protección de las empresas eléctricas y también por los sistemas de protección de las instalaciones particulares de los propios clientes. No obstante, existe un porcentaje bastante bajo de variaciones que logran ingresar las instalaciones eléctricas de los clientes, provocando daños en artefactos eléctricos. Para estos casos, existen dos posibilidades: a) La primera de ellas es que las empresas eléctricas nieguen



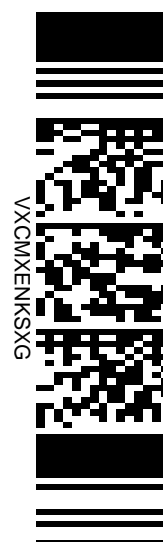
derechamente la reparación, alegando por ejemplo, caso fortuito o fuerza mayor, problemas en las instalaciones de los clientes, causas externas, etc; b) La segunda alternativa es someterse a un procedimiento establecido por la SEC y que está publicado en su página web, este procedimiento es bastante sencillo y muchas veces las empresas eléctricas se someten a él con el objeto de evitar largas contiendas judiciales. En el caso de autos y especialmente respecto de la comuna de Cobquecura se han registrado 12 reclamos, que son los mismos que aparecen en el recurso de protección como representados por la Ilustre Municipalidad de Cobquecura y corresponden a reclamos por artefactos dañados ingresados en CGE con fecha 13 de febrero del presente. En todos los casos de clientes dañados, CGE ya dispuso la revisión de los mismos artefactos por parte de un servicio técnico autorizado, el que, si no lo ha hecho ya, tomará contacto con los afectados para coordinar el retiro de sus artefactos, la posterior revisión y la determinación de si procede o no la reparación o compensación del producto, por lo que pide se rechace el recurso, con costas.

3°.- Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

4°.- Que, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

5° Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

6°.- Que, del tenor del recurso, se aprecia que los hechos en que la recurrente hace consistir la vulneración de derecho que denuncia, serían las repetidas y extensas interrupciones del servicio eléctrico que provee la recurrida en la comuna de Cobquecura, lo cual, se sostiene, se debería a la negligencia y



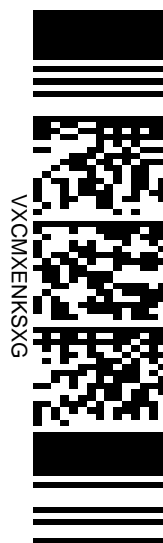
falta de mantención de las líneas eléctricas, incumpliendo así sus obligaciones legales y reglamentarias.

A su turno, la recurrida, objeta el uso de la acción constitucional utilizada por la parte recurrente, pues tanto la materia como las peticiones, exceden la naturaleza cautelar del recurso, sin perjuicio de no existir actuar ilegal o arbitrario alguno y encontrarse los hechos en conocimiento de la sede administrativa que corresponde, motivos por los que aquel debería ser rechazado.

7°.- Que, de los antecedentes incorporados, se constata que, por una parte, se afirma por la recurrente existir numerosas interrupciones en el servicio de distribución eléctrico que la compañía recurrida debe proveer en la comuna de Cobquecura y, por otra, que estas fallas se han producido por la falta de actividad y previsión de aquella. Sin embargo, además de no haber sido acreditados tales asertos, lo cierto es que tanto las infracciones que se denuncian, como las peticiones que se formulan en el recurso, exceden el ámbito meramente cautelar de protección de derechos indubitados que esta acción constitucional provee. En efecto, el servicio de distribución eléctrico se alza como un mercado reglado y supervigilado por la Administración, el cual cuenta con normas de carácter técnico en lo referente a la calidad en que se presta dicho servicio y contiene formas específicas para la determinación de la responsabilidad infraccional que acá se imputa. Por lo tanto, no es esta la vía idónea para el establecimiento de los incumplimientos denunciados y su consecuente enmienda, en caso de existir. Así, por lo demás, parece haber sido entendido por quienes se recurre, al efectuar diversos reclamos ante la propia compañía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por los mismos hechos, de modo que las circunstancias que se alegan en el recurso, ya se encuentran sometidas al imperio del derecho, todo lo cual es sin perjuicio de las demás acciones de lato conocimiento que pudieren incoarse por quienes se consideren afectados por la actividad de la empresa recurrida.

8°.- Que, de la forma razonada, no se ha podido dar por concurrentes los supuestos de hecho sobre los que se construye el recurso, ni puede resolverse la situación planteada en esta sede cautelar de derechos indubitados, motivos por los que el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, **se rechaza, sin costas**, el recurso de protección interpuesto por el abogado Xavier Montes



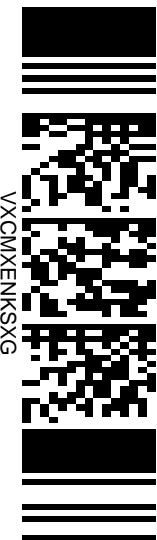
Oyarzún, en representación de la Municipalidad de Cobquecura, en favor de María Margarita Rivas Muñoz, Sandra Loreto Placencia Aguilera, Carmen Gloria Rivas Pilcante, Gabriela del Carmen Rivas Muñoz, Cecilia De Las Mercedes Pilcante Jiménez, Yanira Damari Águila Orellana, María Cecilia Fuentes Briceño, Rafael Ernesto Salgado Silva, Isaías Antonio Rivas Salgado, Jeanette del Carmen Rivas Chamorro, Roberto Felipe Sanhueza Salgado, Claudio Alejandro Leal Leal y Mirta del Carmen Placencia Cofre, en contra de la contra de la Compañía General De Electricidad S.A.

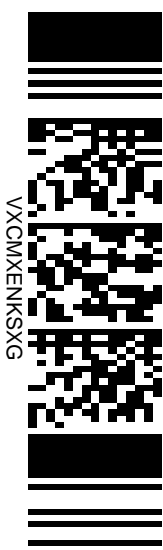
Notifíquese.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, regístrese y, hecho, archívese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial don Solón Viguera Seguel.

Rol N° 371-2023 PROTECCIÓN.





VXCMXENKSG

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Chillan integrada por Ministra Presidente Erica Livia Pezoa G., Ministro Guillermo Alamiro Arcos S. y Fiscal Judicial Solon Rodrigo Viguera S. Chillan, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.

En Chillan, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

